000607/2024

Comodoro Rivadavia, cinco de febrero de 2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos autos caratulados: **"C., M. W. c/ O. C. A. D. S. S.A. s/ SUMARIO", Expte. N° 607/24**, venidos de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero Civil y Comercial (Expte. 274/24) por haber interpuesto la parte actora mediante escrito ID 1544186, recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la resolución de fecha 25/06/24.

I. La decisión cuestionada en el punto 3) establece que la demanda tramitará según las normas del proceso sumario (conf. SD n° 19/23 STJ) y ordena correr traslado por el plazo de diez días ampliados en diez días más en razón de la distancia.

En su memorial, el recurrente cuestiona lo decidido peticionando se decrete el procedimiento sumarísimo y se lo exima de costas, ya que goza el beneficio de litigar sin gastos de pleno derecho.

Manifiesta que es consumidor en los términos de los arts. 1, 2 y 3 LDC, 1092 y 1093 del CCC y 42 CN, y se le desconocen derechos por inaplicación de la normativa especial que atiende el caso, toda vez que se relacionó con la empresa demandada a quien solicitó un servicio para satisfacción de sus necesidades personales sin ánimo de lucro, como es el contrato de seguro automotor de todo riesgo con franquicia. La demandada es un profesional experto alcanzado por la normativa consumeril frente a sus tomadores de póliza. Existe una relación de consumo y le corresponde protección al actor.

Advierte que se omitió aplicar la normativa correspondiente, por lo que peticiona se deje sin efecto la intimación al pago de la tasa de justicia y se

modifique el tipo de proceso, conforme normativa procesal provincial de defensa del consumidor.

Rechazado el recurso de reposición se concede la apelación en relación y con efecto suspensivo.

II. Ingresando a la revisión propuesta, recordamos que el Juez puede imprimir el tipo de proceso cuando éste no estuviere determinado por ley específica, siendo tal decisión irrecurrible para las partes, quienes, además, deben readecuar su pretensión al proceso determinado por el juez. Ello así, por cuanto las partes, en principio no pueden disponer de las formas del proceso.

Ahora, esta facultad-deber del magistrado como director del proceso, tiene su límite en los casos en que una norma indique para determinada contienda un trámite específico (cfr. Morello, Sosa y Berizonce Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación T. IV-A ps. 313 y ss, Roland Arazi Jorge A. Rojas en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado Tomo II p. 79).

Hemos señalado en otros pronunciamientos que, no se desconoce el fallo citado del STJCH- SD 19/23-, pero no se puede dejar de señalar que aquel refiere a un caso distinto al que aquí se presenta, pues los Sres. Camaristas fundaron su condena a la aseguradora en la Ley de Defensa del Consumidor. El precedente enunciado consistió en el reclamo de los padres y esposo de la víctima de un accidente de tránsito por la muerte de ésta y lesiones del esposo, contra el conductor del otro automotor y los titulares registrales, con citación de la compañía aseguradora del demandado que, opuso excepción de no seguro, derivada de la falta de pago de

la prima al momento del siniestro por la empresa asegurada.

Al tratar el recurso de casación interpuesto en dicho proceso, luego de analizar los votos de los Sres. Camaristas, el Superior Tribunal de Justicia cita fallos de la CSJN que considera que una ley general posterior no deroga ni modifica implícita o tácitamente, la ley especial anterior como es la ley de seguros. Luego de citar el precedente "B." distingue que el damnificado reviste la condición de tercero frente a la relación jurídica entre los otorgantes del contrato de seguro, porque no participa de su realización.

Aquí el caso es distinto, pues quien reclama es el propio asegurado.

Se ha dicho que: "el seguro es un contrato de consumo cuando es celebrado a título oneroso, entre un consumidor final -persona física o jurídica- con una persona jurídica que, actuando profesionalmente, se obliga, mediante el pago de una prima o cotización a prestar un servicio (art. 1°, inc. b Ley 24.240), consistente en la asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas (…) dicho régimen no se superpone, sino que se integra, en un "diálogo de fuentes", junto a la norma especial instaurada por la Ley 17.418, pues la Ley 24.240 amplía el sistema de protección de los usuarios y consumidores y debe aplicarse coordinadamente (sin que ello implique un desplazamiento) con los demás cuerpos normativos" (cfr. esta Cámara SI n° 587/23 y 243/24 entre otras).

Surge que el actor reclama por los daños ocasionados el 29/07/23 al vehículo asegurado marca Volkswagen Voyage 1.6L/17 trendline, modelo 2017, dominio X., por el que se contrató seguro automotor con la demandada conforme

póliza N° X., como destinatario final del bien asegurado conforme surge de la póliza de seguro y documental agregada, en los términos del art. 1 de la ley 24240 y art. 1093 CCyC y, que la demandada es proveedora de los servicios y productos que ofrece en los términos del artículo 2 de la ley 24240.

En consecuencia, conforme los términos de la demanda y documental adunada, corresponde encuadrar el caso dentro de una relación de consumo, régimen expresamente citado por la accionante.

En base a todo lo expuesto, se concluye que el reclamo de la parte actora contra la compañía de seguros contratada por los daños ocasionados por el incumplimiento contractual que acusa, es susceptible de la tutela prevista por las normas del derecho de consumo, en base a la interpretación funcional desde la perspectiva que ofrecen los arts. 42 y 75, inciso 22 CN.

En casos como el de autos, consideramos que cabe aplicar el derecho e interpretar los hechos a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus modificatorias e imponer en consecuencia, el trámite más breve, el proceso sumarísimo.

Por lo expuesto, se resuelve hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar el punto II) 3°) de la resolución de fecha 25/06/24 y establecer que la demanda interpuesta tramitará según las normas del proceso sumarísimo debiéndose adecuar el mismo a dicha normativa.

III. Las costas de esta instancia, por no mediar contradicción, se imponen por su orden (cfr. art 69 y cc del CPr.), procediéndose a regular honorarios de acuerdo a las pautas de la Ley XIII N° 4 (arts. 6 a 9,13, 32 y 46).

Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial N° II con asiento en Comodoro Rivadavia, **RESUELVE:**

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el punto II) 3°) de la resolución de fecha 25/06/24 y establecer que la demanda tramitará según las normas del proceso sumarísimo.

2) Imponer las costas de esta instancia por su orden.

3) Regular los honorarios profesionales del Dr. M. G. B. I., en el cinco por ciento (5%), de lo que se le regulen en la sentencia definitiva en el presente proceso, con más la alícuota del IVA si correspondiere.

4) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

SENTENCIA REGISTRADA BAJO EL N° 29 AÑO 2025
DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS